



***** (1).

VS.
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

EXPEDIENTE 86/2023 S.E.

Mexicali, Baja California, a veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

SENTENCIA DEFINITIVA que declara la nulidad de la resolución emitida el veinte de abril de dos mil veintitrés por la Comisión de Honor y Justicia en el procedimiento administrativo de responsabilidad ***** (2), con fundamento en el artículo 108, fracción IV, de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, en virtud de que no existen elementos probatorios suficientes que acrediten la falta administrativa atribuida a la parte actora.

GLOSARIO: Se invocan autoridades y normas conforme a las siguientes denominaciones:

Ley del Tribunal	Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California publicada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
Tribunal	Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
C4	Centro de Control, Comando y Comunicación.
Comisión de Honor y Justicia	Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Mexicali.
Reglamento del Servicio Profesional	Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali, Baja California.
Sala Especializada	Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción.

Enseguida se procede a emitir sentencia en el juicio, y

R E S U L T A N D O:

I.- Que el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés la parte actora interpuso demanda de nulidad contra la resolución de veinte de abril de dos mil veintitrés emitida por la Comisión de Honor y Justicia en el procedimiento de responsabilidad administrativa ***** (2) mediante la

cuando se le impuso sanción consistente en suspensión temporal del cargo por un término de quince días laborales sin goce de sueldo.

II.- Que mediante acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés se admitió la demanda, teniéndose como autoridad demandada a la Comisión de Honor y Justicia, quien al contestarla sostuvo la validez del acto impugnado.

III.- Que el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés se declaró cerrada la instrucción en el presente juicio, citándose a las partes para oír sentencia de primera instancia, por lo que se está en condiciones de resolver la controversia planteada en el juicio; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente juicio, con fundamento en el artículo 55, Apartado A, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y artículos 1, 4, fracción III, 6, 27, fracción II, inciso b, de la Ley del Tribunal, tomando en consideración que la resolución impugnada emana de una autoridad municipal y es de las que se dictan en materia administrativa respecto a la imposición de sanciones a los miembros de las instituciones policiales.

SEGUNDO. Existencia de la resolución impugnada. La existencia de la resolución impugnada quedó debidamente acreditada con la copia certificada exhibida por la autoridad demandada que obra de fojas 666 a 706 de autos, así como por su reconocimiento expreso de la autoridad al contestar la demanda, lo cual hace prueba plena de su existencia con fundamento en los artículos 285, fracciones I y III, 322, fracción V, 323, 400 y 405, del Código Civil Adjetivo del Estado, de aplicación supletoria en materia contencioso administrativa con fundamento en el artículo 41, tercer párrafo, de la Ley del Tribunal.

TERCERO. Procedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se procede a analizar la causal de improcedencia y sobreseimiento que hizo valer la autoridad demandada.

La Comisión de Honor y Justicia al contestar la demanda manifestó que en el presente asunto se actualiza la

causal de improcedencia prevista en el artículo 54, fracción IV, segundo párrafo, de Ley del Tribunal, en base a lo siguiente:

1.- Que la parte actora controvierte cuestiones relativas al acuerdo de inicio de procedimiento de remoción de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que ha transcurrido en demasía el término para impugnarlas, lo que implica el consentimiento tácito de tales actuaciones.

Es **infundada la causal de improcedencia** hecha valer por la autoridad demandada en atención a las siguientes consideraciones.

El artículo 54, fracción IV, de la Ley del Tribunal, disponen lo siguiente:

"ARTÍCULO 54.- *El juicio ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es improcedente contra actos o resoluciones:*

(...)

IV. Respecto de las cuales hubiere consentimiento expreso o tácito, entendiéndose por este último cuando no se promovió medio de defensa en los términos de las Leyes respectivas o juicio ante el Tribunal, en los plazos de la Ley...

(...)"

Del precepto transcrito, se advierte que el juicio contencioso es improcedente contra actos o resoluciones respecto de las cuales hubiere consentimiento expreso o tácito, entendiéndose por este último cuando no se promovió medio de defensa en los términos de las Leyes respectivas o juicio ante el Tribunal, en los plazos de la Ley.

Dicha causal de improcedencia es en relación al acto o resolución definitiva que se impugne en el juicio contencioso administrativo.

Es decir, que en contra de una resolución definitiva no se haya promovido medio de defensa en los términos de las Leyes respectivas o juicio ante el Tribunal.

En efecto, conforme a lo dispuesto por los artículos 26, 27, fracción II, 28 y 30, de la Ley del Tribunal, este Tribunal es competente para conocer de resoluciones o actos administrativos definitivos, entendiéndose por definitivos aquéllos que no puedan ser revocados o modificados sino mediante recurso administrativo o medio de defensa previsto

por la ley que rija el acto o en el proceso contencioso administrativo.

Asimismo, se precisa que para determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo debe considerarse también la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública.

Tratándose de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, **pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento**, y cuando se impugne ésta **podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución**.

Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis 2a. X/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de subsecuente inserción:

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan "resoluciones definitivas", y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de "resoluciones definitivas" las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión

cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados.

Registro digital: 184733; Aislada; Materias(s): Administrativa; Novena Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: Tomo XVII, Febrero de 2003; Tesis: 2a. X/2003; Página: 336.

En el caso, la parte actora impugna la resolución de veinte de abril de dos mil veintitrés emitida por la Comisión de Honor y Justicia en el procedimiento de remoción *****⁽²⁾, mediante la cual se le impuso sanción consistente en suspensión temporal por quince días laborales sin goce de sueldo.

Dicha resolución definitiva derivó de un procedimiento administrativo de remoción seguido en contra del actor, el cual se apoyó en una investigación administrativa.

Precisado lo anterior, como se anticipó, es **infundada** la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad demandada, atendiendo a que no va encaminada a sostener la improcedencia de la resolución impugnada materia del presente juicio, sino a que la parte actora no puede controvertir actuaciones procedimentales relativas al procedimiento administrativo del que derivó dicha resolución definitiva, por considerar que ha transcurrido en demasía el termino para impugnar tales actuaciones.

Cuestiones que no tornan improcedente el juicio contencioso administrativo, por lo que hace a la resolución impugnada materia del presente juicio.

Máxime que, como se expuso en párrafos precedentes, tratándose de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución.

Esto, en razón de que las violaciones cometidas durante el procedimiento hechas valer por el demandante son susceptibles de analizarse en el presente fallo; de lo contrario, quedarían intocados los vicios o irregularidades que anteceden a la resolución final y, además, se desvirtuaría el sistema de impugnación previsto por la Ley del Tribunal, en donde se establece la posibilidad de declarar la nulidad por violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento, según los artículos 108, fracción III, y 109, fracción III, de la ley en cita.

Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis 2a./J. 8/2008 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN O AUDITORÍA PUEDEN RECLAMARSE EN EL JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN DISCIPLINARIA Y EL PLANTEAMIENTO RESPECTIVO DEBERÁ ESTUDIARSE POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

Del análisis sistemático de las disposiciones correspondientes de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se advierte que la resolución que culmina con la imposición de una sanción disciplinaria se apoya en la investigación o en la auditoría efectuada por los funcionarios competentes, ya que la finalidad de estas etapas es aportar a las autoridades sancionadoras elementos, informes o datos que les permitan resolver sobre la presunta responsabilidad administrativa del servidor público federal. En efecto, existe tal vinculación en los procedimientos previstos por el legislador en dicha materia, que los vicios o irregularidades de la investigación o de la auditoría pueden trascender e influir, por ende, en la tramitación o sustanciación del procedimiento disciplinario y en la resolución respectiva, de tal suerte que cuando el interesado demande su nulidad podrá hacer valer también toda clase de vicios de procedimiento ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual estará constreñido a su estudio y resolución, en términos de los artículos 15 de su Ley Orgánica, 25 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Registro digital: 170191; Instancia: Segunda Sala; Novena Época; Materias(s): Administrativa; Tesis: 2a./J. 8/2008; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 596; Tipo: Jurisprudencia.

CUARTO. Motivos de inconformidad. Atendiendo al principio de economía procesal, se tienen por reproducidos los motivos de inconformidad planteados por el demandante, toda vez que la Ley del Tribunal no establece como obligación transcribirlos; sin demérito de que, a fin de satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia, en su caso, se realice el examen de los argumentos planteados, una vez precisados los puntos sujetos a debate.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/44 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.

De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.

Registro digital: 164618; Instancia: Segunda Sala; Novena Época; Materias(s): Común; Tesis: 2a./J. 58/2010; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830; Tipo: Jurisprudencia.

QUINTO.- Responsabilidad administrativa.

En primer orden, se precisa la responsabilidad administrativa imputada a la parte actora en el procedimiento administrativo de remoción *****⁽²⁾ instaurado en su contra.

En la resolución de veinte de abril de dos mil veintitrés, la Comisión de Honor y Justicia determinó que el actor era responsable administrativamente de haber incumplido con la obligación prevista en el artículo 20, fracción XXXVI, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial.

El artículo aludido establece lo siguiente:

"Artículo 20.- Los Policías tendrán las siguientes Obligaciones:

(...)

XXXVI. Reportar a la central de radio, la detención de cualquier persona o vehículo, en el momento en que ésta se lleve a cabo, e informar del traslado o remisión previamente a su ejecución; y cumplir con extrema cautela el traslado de los detenidos, procesados o sentenciados, puestos bajo su custodia, tomando las precauciones necesarias a efecto de evitar la evasión de los mismos;

(...)"

Conducta:

La autoridad administrativa determinó que se incumplió con el citado precepto legal en razón de que la parte actora, en su carácter de Agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, el día treinta de diciembre de dos mil diecinueve, omitió reportar en tiempo y forma al C4 la detención de un vehículo tipo ***** (3), realizada en Avenida Rio Verde y calle Sexta, de esta ciudad, en la unidad de patrulla número ***** (3), toda vez que el registro del reporte de detención se realizó a las cinco horas con quince minutos (5:15), esto es treinta y ocho minutos después de las cuatro horas con treinta y siete minutos (4:37) que fue el momento en que el supervisor adscrito a la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Sindicatura Municipal asentó en el acta la detención del referido vehículo, según se aprecia de la siguiente transcripción (fojas 9 y 14 de la resolución impugnada):

(Foja 9) ".- **ANÁLISIS AL INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN GRAVE.** Del auto que dio inicio al presente Procedimiento de Remoción se advierte que la responsabilidad administrativa que presuntamente incumplió la **C. ***** (1) y/o ***** (1)**, Miembro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, es la prevista en el artículo **20** fracción **XXXVI** del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali, Baja California, al no haber reportado a la Central de Radio la detención de un vehículo, en el momento en que ésta se llevó a cabo; toda vez que, el día treinta de diciembre de dos mil diecinueve, a las cuatro horas con treinta y siete minutos (04:37 horas), la Miembro ******* (1) y/o ***** (1)** presuntamente tripulante de la Unidad de Policía Municipal número ***** (3), detuvo al supervisor de nombre ***** (1), adscrito al Departamento de Supervisión de la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Sindicatura Municipal, cuando conducía un vehículo tipo ***** (3), sin que la miembro en mención, hubiese realizado el reporte correspondiente a la central de radio C4, en tiempo y forma; obligación que se considera como **grave** de acuerdo al artículo **233** del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali, Baja California, donde señala que "Los Miembros serán sancionados con suspensión temporal o removidos del cargo cuando incurran en responsabilidad administrativa grave" y se considera responsabilidad administrativa grave "...el incumplimiento de las **fracciones XXVIII al LXIV del artículo 20** de este reglamento"; siendo la obligación incumplida la contenida en el artículo **20** fracción **XXXVI** del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali, Baja California."

...

(Fojas 14) "**3.- Documental Pública**, consistente en copia certificada de las bitácora de detención de vehículos y consulta de orden de aprehensión y robo de vehículos de fecha veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve, tercer turno, perteneciente a zona oriente, donde se registra la detención realizada por la unidad ***** (3); misma que fue remitida mediante oficio número ***** (4), de fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte, signado por la Lic. ***** (1), en su calidad de Titular de la Coordinación Jurídica de Dirección de seguridad Pública Municipal, a través del cual remite diverso oficio con número ***** (4), signado por Lic. ***** (1), Comandante de UDAI y del Centro estratégico de Evaluación de Eficiencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (Visible de foja 52 a 56 de autos); Probanzas a las que se les concede valor probatorio pleno, por tratarse de un documento elaborado por personas que tienen capacidad, competencia y

facultades para expedirla, de conformidad con los artículos 285, fracción III, 322, fracción II y V, 323, 405 y 418 del Código de procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, de aplicación supletoria en términos del artículo 243 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali, Baja California; documento que deriva de hechos conocidos en razón del ejercicio de sus funciones toda vez que no existe, a juicio de quien resuelve, elementos para considerar que se conducen con falsedad. Quedando evidenciado de la bitácora de detención de vehículos que el día veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del tercer turno, zona oriente, la unidad *****⁽³⁾ se encontraba en servicio activo y realizó un reporte de detención; asimismo, se desprende que dicha bitácora fue realizada por el despachador de nombre *****⁽¹⁾, en la que se observa un reporte a las 5:15 horas (cinco horas con quince minutos) del veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve de un vehículo *****⁽³⁾ con la siguiente connotación "vía teléfono paso reporte, comunica no tiene móvil" *****⁽³⁾ en 6ta Rio Verde (Visibles de foja 48 a la 54 de autos). Probanza que es pertinente y suficiente para acreditar la omisión del procesado *****⁽¹⁾ Y/O *****⁽¹⁾, de realizar el reporte de detención a la central de radio en el momento en que esta se llevó a cabo, tal y como lo dispone el reglamento de la materia, es decir, "en el momento de estarla realizando". Siendo importante precisar, que, si bien es cierto, de la bitácora se advierte un reporte de detención, con las características similares, al vehículo, descrito en el acta administrativa, siendo este un vehículo *****⁽³⁾, también lo es que, la realizó con posterioridad a llevarla a cabo; esto fue, después de advertir la presencia de los supervisores en el lugar de la intervención, es decir a las 5:15 horas y no a las 4:37 horas como se advierte en la bitácora que nos ocupa, toda vez que las placas y características del vehículo así como lugar de la detención coinciden con las escritas en el acta administrativa. Con lo anterior, se acredita que el reporte de detención no fue realizado en el momento en que se llevó a cabo, conforme a las fracciones I, II y III del artículo 131 del Reglamento de Tránsito para el municipio de Mexicali, Baja California, debiéndose seguir el procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones de tránsito, refiriéndose en las ya citadas fracciones, que una vez que se detenga al conductor, deberá permanecer en su vehículo y el agente informara a la central de radio respecto a la acción que se realice, identificando el vehículo, lugar y motivo de la detención, para posteriormente identificarse con el conductor y señalarle la infracción que ha cometido; igualmente, la directiva número 61.1.7 DETENCION DE VEHICULOS DE MOTOR, inciso a) "PROCEDIMIENTO DE INFRACCIONES DE TRANSITO" y directiva 61.1.7, inciso b) "PARADAS EN RIESGO DESCONOCIDO" del manual de procedimientos operativos de la dirección de seguridad pública municipal (CALEA), establece el procedimiento ordinario que los agentes de policía y tránsito adscrito a la dirección de seguridad pública municipal deben ejecutar en la detención de vehículos de motor motivadas por la comisión de una infracción de tránsito al reglamento de Tránsito Municipal. Por lo tanto, la presente documental es pertinente y eficaz para acreditar el incumplimiento a la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción XXXVI del reglamento de la materia, toda vez que el procesado no realizó el reporte de la detención en el momento en que se llevó a cabo. "

SEXTO.- Estudio del motivo de inconformidad

Primero.

Son **fundados** los argumentos expuestos por la parte actora en el motivo de inconformidad en estudio, consistentes en los siguientes:

- Que no existen pruebas aportadas por el órgano investigador contundentes, ni administradas entre sí, con las que la autoridad acredite plenamente su responsabilidad administrativa.

- Que en la resolución impugnada no se valoraron los elementos de prueba que obraban en su favor, como la bitácora de detención de vehículos de la cual se advierte que sí existe reporte a la central de radio a las 05:05 horas, realizado durante la intervención al vehículo en cuestión, así como la testimonial rendida por el Agente Enrique Mera Mata.

- Que las pruebas que valoró la autoridad demandada para tener por acreditada su responsabilidad, no logran destruir la presunción de inocencia que opera en el procedimiento administrativo sancionador.

Que el acta administrativa elaborada por los supervisores de Sindicatura Municipal fue indebidamente valorada por la autoridad demandada, que dicha acta no hace prueba plena.

Se explica.

Como se señaló en el considerando quinto del presente fallo, la autoridad determinó en la resolución impugnada que el actor incumplió con la obligación prevista en el artículo 20, fracción XXXVI, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, en razón de que éste, en su carácter de Agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, el día treinta de diciembre de dos mil diecinueve, **reportó fuera de tiempo y forma al C4 la detención** del vehículo tipo ***** (3), esto en Avenida Rio Verde y calle Sexta, de esta ciudad, efectuada a bordo de la unidad de patrulla ***** (3).

Esto, refiere la autoridad demandada en la resolución impugnada, debido a que la parte actora tenía detenido el referido vehículo a las cuatro horas con treinta y siete minutos (4:37), momento en que el supervisor adscrito a la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Sindicatura Municipal asentó en el acta, realizándose el reporte de la detención a las cinco horas con quince minutos (5:15), según consta en bitácora de detención de vehículos de la indicada fecha.

Lo anterior, continúa la autoridad demandada, en contravención a lo dispuesto a las fracciones I, II y III del artículo 131 del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Mexicali, Baja California, que disponen que, una vez que se detenga, el conductor deberá permanecer en su vehículo y el agente informará a la central de radio respecto a la acción que



se realice, identificando el vehículo, lugar y motivo de la detención, para posteriormente identificarse con el conductor y señalarle la infracción que ha cometido.

BAJA CALIFORNIA

Así como a lo dispuesto en la directiva número 61.1.7 "DETENCIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR", inciso a) "PROCEDIMIENTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO" y directiva 61.1.7, inciso b), "PARADAS EN RIESGO DESCONOCIDO", del Manual de Procedimientos Operativos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (CALEA), que establecen que se debe reportar a C-4 la detención de un vehículo dando los datos del mismo, posterior a que el conductor detiene la marcha del vehículo y que se deberá efectuar la notificación apropiada al despacho de la detención del vehículo y posterior a ello posicionará adecuadamente la patrulla (en un ángulo ligeramente atrás del vehículo del infractor para proteger al agente al momento de acercarse al infractor) y asegurar al conductor y al agente del tráfico vehicular.

Por tanto, concluye la autoridad, que la parte actora debió efectuar el reporte en tiempo y forma en el momento en que se llevó a cabo la detención, esto es, antes de que descendiera de la unidad a interactuar con el ciudadano.

Ahora bien, como lo hizo valer el demandante en el primer motivo de inconformidad, se advierte que **las pruebas obrantes en el procedimiento administrativo resultan insuficientes para demostrar el incumplimiento a la obligación** prevista en el artículo 20, fracción XXXVI, del Reglamento del Servicio Profesional, consistente en reportar a la central de radio la detención de cualquier persona o vehículo en el momento en que ésta se lleve a cabo.

Esto es así, toda vez que se considera que las pruebas que valoró la autoridad para tener por demostrado el hecho constitutivo de la falta administrativa atribuida al demandante, no logran destruir la presunción de inocencia de la que goza el servidor público sujeto a un procedimiento administrativo sancionador.

Lo anterior, tomando en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.) estableció que el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador, ya que es un procedimiento del que pudiera derivar una sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, por lo que el presunto responsable sujeto

El procedimiento administrativo goza de la calidad de inocente hasta en tanto la autoridad no acredite lo contrario con prueba fehaciente que así lo demuestre.

La Corte estableció que en atención al principio de presunción de inocencia, el Estado es quien debe probar los hechos constitutivos de la infracción administrativa de la cual se le atribuye su incumplimiento al servidor público, por lo que se desplaza la carga de la prueba a la autoridad, en atención al debido proceso.

El criterio invocado es del tenor siguiente:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES.

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso.

Época: Décima Época; Registro: 2006590; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: P./J. 43/2014 (10a.); Página: 41.

El principio de presunción de inocencia se vincula con la carga de la prueba que consiste en la búsqueda de demostrar

la responsabilidad para debilitar la presunción de inocencia y desvirtuarla, por lo que las pruebas de cargo deberán ser suficientes para demostrar la responsabilidad imputada al servidor público, ya que sólo así el Estado estará en aptitud de sancionarlo.

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis P. VII/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se reproduce a continuación:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONTENIDO DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL.

La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los Jueces la absolución de los inculcados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar.

Registro digital: 2018965; Aislada; Materias(s): Constitucional; Décima Época; Instancia: Pleno; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Tomo: Libro 62, Enero de 2019 Tomo I; Tesis: P. VII/2018 (10a.); Página: 473.

Conforme al principio de presunción de inocencia le corresponde a la autoridad demandada acreditar que la parte actora incumplió la obligación prevista en el artículo 20, fracción XXXVI, del Reglamento del Servicio Profesional, consistente en reportar a la central de radio, la detención de cualquier persona o vehículo, en el momento en que ésta se lleve a cabo; a través de los medios probatorios que sean aptos y suficientes, con los que no quede duda la responsabilidad administrativa que se le atribuyó al actor; en caso contrario, debe absolverse al servidor público por no acreditarse la existencia de la responsabilidad administrativa.

Como se anticipó, de un análisis de las constancias remitidas por la autoridad, esta Juzgadora estima que **las pruebas obrantes en el procedimiento administrativo ***** (2) son insuficientes para acreditar que la parte actora omitió reportar al C4 en tiempo y forma el día**

treinta de diciembre de dos mil diecinueve a las cuatro horas con treinta y siete minutos (4:37) la detención de un vehículo tipo ***** (3), en el momento en que tal detención se llevó a cabo en avenida Rio Verde y calle Sexta, de esta ciudad, en la unidad ***** (3).

Veamos.

En el presente juicio, mediante escrito de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés la autoridad demandada remitió copia certificada del expediente del procedimiento de remoción ***** (2), el cual esta Juzgadora considera que es de eficacia demostrativa plena, conforme a lo dispuesto por los artículos 285, fracción III, 322, fracción II, 323, 400 y 405, del Código Civil Adjetivo, de aplicación supletoria en materia contencioso administrativa con fundamento en el artículo 41, tercer párrafo, de la Ley del Tribunal.

Ahora bien, de la resolución impugnada se advierte que la autoridad demandada **sustentó la responsabilidad** administrativa de la parte actora, **esencialmente, en los siguientes medios probatorios** obrantes en autos del procedimiento administrativo ***** (2) consistentes en:

1.- Acta administrativa número *** (4)** de treinta de diciembre de dos mil diecinueve, suscrita por el supervisor adscrito a la Dirección de Responsabilidades Administrativas de Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, ***** (1); misma que fue robustecida con la comparecencia de su suscriptor. (Visible a fojas 86 a 88 de autos).

1.1.- Anexos del Acta administrativa número *** (4)** de treinta de diciembre de dos mil diecinueve, consistentes en: tres impresiones a blanco y negro de identificación de los Miembros de Dirección de Seguridad Pública Municipal de nombres ***** (1), ***** (1) y Enrique Mera Mata, obtenidas del Sistema de Identificación de la Sindicatura Municipal, denominado SISPROAD, una presión fotográfica donde se observa el cofre de una Unidad de Patrulla de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y una persona de sexo masculino sobre el carril central derecho con vestimenta característica de los miembros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como una impresión fotográfica donde se observan tres personas del sexo masculino sobre la banqueta, con vestimenta característica de los

Miembros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal con placas numero P-***** (3). (Visible de foja 89 a 93 de autos)

1.2.- Anexos del Acta administrativa número *** (4)** de treinta de diciembre de dos mil diecinueve, consistentes en: documental pública consistente en original del rol de servicio de veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve, correspondiente al tercer turno de la estación Bugambillas, donde se advierte que la C. ***** (1) se encontraba en estatus activo como operador de patrulla. (Visible a foja 94 de autos)

2.- Acuerdo de Inicio de Investigación Administrativa número ***** (2), de fecha treinta de diciembre de dos mil diecinueve. (Visible a fojas 95 a 98 de autos)

3.- Documental Pública consistente en copia certificada del **Nombramiento** de la C. ***** (1), mismo que fue remitido mediante oficio número ***** (4) de fecha veinte de enero de dos mil veinte, signado por el Jefe de recursos Humanos del Ayuntamiento de Mexicali. (Visible a fojas 114 y 119 de autos)

4.- Documental Pública consistente en original del oficio ***** (4) de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, suscrito por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, mediante el cual informa que la miembro ***** (1) se encuentra activo, que no cuenta con correctivos disciplinarios, asimismo, remite copia certificada de su **Hoja de Servicio**. (Visible de foja 121 a 123 de autos)

5.- Documental Pública consistente en copia certificada del **Rol de Servicio y Control de Novedades**, pertenecientes a Estación Bugambillas de fecha veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve, mismos que fueron remitidos mediante oficio número ***** (4) de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, signado por el Comandante de UDAI y Centro Estratégico de Evaluación de Eficiencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. (Visible a foja 133 a 135 de autos)

6.- Documental Pública consistente en copia certificada de la **bitácora de detención de vehículos y consulta de orden de aprehensión y robo de vehículos** de fecha veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve, tercer turno, perteneciente a zona oriente, donde se registra la

detención realizada por la unidad ***** (3), remitida mediante oficio ***** (4) de fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte, signado por la Titular de la Coordinación Jurídica de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. (Visible de foja 136 a 139 de autos)

Análisis de las pruebas de cargo.

La obligación omitida imputada al actor por la demandada, como se expuso con antelación, se encuentra prevista en el artículo 20, fracción XXXVI, del Reglamento del Servicio Profesional, de subsecuente inserción, el cual establece que los policías tienen la obligación de reportar a la central de radio, la detención de cualquier persona o vehículo en el momento en que esta se lleve a cabo.

"Artículo 20.- Los Policías tendrán las siguientes Obligaciones:

(...)

XXXVI. Reportar a la central de radio, la detención de cualquier persona o vehículo, en el momento en que ésta se lleve a cabo, e informar del traslado o remisión previamente a su ejecución; y cumplir con extrema cautela el traslado de los detenidos, procesados o sentenciados, puestos bajo su custodia, tomando las precauciones necesarias a efecto de evitar la evasión de los mismos;(...)"

Del precepto en cuestión, se advierte que **los hechos que deben estar debidamente acreditados** para que se actualice la falta administrativa de referencia, consisten en acreditar **que la parte actora detuvo un vehículo** en el ejercicio de sus funciones como Agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali **y la omisión de reportar** dicha detención a la **Central de Radio C4 a la hora que el supervisor asentó en el acta que advirtió la detención del vehículo, toda vez que él (el supervisor) era el tripulante del referido vehículo.**

Ahora bien, respecto al **hecho consistente en que la parte actora detuvo un vehículo en el ejercicio de sus funciones**, la demandada lo tuvo por acreditado con el Acta Administrativa de treinta de diciembre de dos mil diecinueve elaborada por el supervisor adscrito a la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali.

A dicha Acta Administrativa la autoridad le concedió valor demostrativo pleno para tener por acreditado que el día treinta de diciembre de dos mil diecinueve a las cuatro horas

con treinta y siete minutos (4:37) el actor detuvo un vehículo tipo ***** (3), y que tal detención se llevó a cabo en avenida Rio Verde y calle Sexta, de esta ciudad.

La ilegalidad de la resolución impugnada se sustenta en que, como lo hace valer la parte actora, indebidamente la demandada le concedió alcance demostrativo pleno al Acta Administrativa de referencia para tener por acreditado que en la hora señalada (4:37) la parte actora detuvo un vehículo en el ejercicio de sus funciones y que a esa hora como lo asentó el supervisor no realizó el reporte, en razón de que solo tiene valor de indicio.

Del **Acta Administrativa** de treinta de diciembre de dos mil diecinueve, se observa que el supervisor adscrito a la Dirección de Responsabilidades Administrativas de Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali asentó lo siguiente (visible a fojas 86 a 88 de autos):

"ACTA ADMINISTRATIVA"

*"En Mexicali Baja California, siendo las Cuatro Horas, con cincuenta y cinco minutos, del día treinta del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve, los suscritos CC. ***** (1), con el carácter de supervisores de la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Sindicatura Municipal, lo que se acredita con los gafetes números 15670, expedidos por el Síndico Procurador del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, con vigencia hasta el 30 de Septiembre del 2027, y autorizados en términos de los artículos 8 fracciones II y XXI, artículo 10 fracción I, artículo 11 fracciones IX y X, 12 fracción IV y 16 fracciones I, II, VII, VIII y XI del Reglamento Interno de la Sindicatura Municipal de Mexicali, Baja California; a desempeñar las actividades de SUPERVISIÓN de esta Sindicatura, comprendiendo entre estas: participar en operativos, recibir y brindar atención a quejas y/o denuncias ciudadanas, levantar actas administrativas cuando algún servidor público municipal incumpla con las obligaciones previstas en la Ley o en los Reglamentos que le resulten aplicables, y/o hechos que resulten competencia de este Órgano de Control Interno, motivo por el cual, procedemos a levantar la presente acta administrativa, por lo que HACEMOS CONSTAR: Que una vez constituidos en Avenida Río Verde y Calle Sexta en Colonia Gonzalez Ortega, se procede a desahogar la presente diligencia de carácter administrativo, por la presunción del acto u omisión que constituye una infracción administrativa del agente servidor (es) público (s) de nombre(s): ***** (1) y ***** (1) quien se encuentra adscrito al área de Estación Bugambilias, desempeñando el empleo, cargo o comisión de Agentes de la Policía Municipal.*

HECHOS: *Siendo las cuatro horas con treinta y siete minutos del día treinta de diciembre de dos mil diecinueve, el suscrito al hacer un recorrido de supervisión circulaba por la avenida rio verde en dirección oeste a este en vehículo propiedad de la sindicatura municipal ***** (3), es el caso que en la intersección de Avenida Rio Verde y Calle Sexta, en la colonia González ortega me enciende códigos y sirenas la unidad de policía municipal ***** (3) por lo que detengo mi marcha y enseguida la citada unidad se detiene detrás del que suscribe, esto sin haber hecho el respectivo reporte a la central de radio C4, en seguida se bajan dos agentes de policía municipal, un varón y una fémina, en seguida me aborda el agente de sexo masculino quien portaba una pañoleta que impedía mostrar su rostro, quien menciona que si tenía mucho con el pick up y preguntando inmediatamente después si el vehículo era de mi propiedad por lo que le suscrito respondí que el automóvil es*

propiedad de la sindicatura municipal mientras mostraba el gafete que me señala como supervisor de la sindicatura municipal, por lo que le solicite que se identificara así como le cuestione el motivo de mi detención, este se negó a identificarse o mostrar credencial alguna, solo agregando literalmente "el *****⁽¹⁾ anda por aquí, pensamos que era el" mientras él hablaba esto su compañera empezó a revisar el citado vehículo propiedad de la sindicatura municipal, por lo que me baje del auto y de nuevo le solicite que se identificara, tanto al varón como a la fémina, negándose los dos a hacerlo, solo diciendo que le hablarían a su supervisor, nunca mostrando su rostro el agente a pesar de haberle pedido que se quitara la pañoleta del rostro, llegando aproximadamente cinco minutos después otro agente de la policía municipal de nombre Mera Mata Enrique, quien se ostentó como supervisor de zona, quien le manifesté lo sucedido pidiendo que los agentes se identificaran de nueva cuenta, volviendo a tener una negativa, el supervisor solo se limitó a mencionar que por esta zona una persona de apodo el *****⁽¹⁾ ha hecho bastantes robos y que quizás el agente se confundió, por lo que les manifesté a los agentes tripulantes de la unidad *****⁽³⁾ que elaboraría la presente acta por el motivo de no reportar la detención de un vehículo a la central de radio, negarse amonstrar identificación alguna entorpeciendo así las labores de la sindicatura municipal así como negarse a mostrar su rostro el agente de policía varón, negándose de nueva a identificarse, por lo que acudí a sub comandancia este, situada en cerrada robledo industria sin número, solicitando el rol de servicio de la multicitada unidad, proporcionándome el rol de servicio de la estación bugambilias del tercer turno, del día veintinueve de diciembre de do mil diecinueve, en donde esta señalado los tripulantes de la citada unidad y quien el supervisor de apellido *****⁽¹⁾ confirmo que son *****⁽¹⁾ y *****⁽¹⁾ a quienes se levanta la presente acta por los motivos antes descritos sin otorgar el uso de la voz en virtud de que se negaron a identificarse así como a las indicaciones del suscrito."

Contrario a lo que resolvió la demandada, el valor probatorio de la referida **acta administrativa** se reduce a un **valor de indicio**, en razón de que de constancias se advierte que se allegó al procedimiento administrativo de remoción *****⁽²⁾ en calidad de instrumental de actuaciones, por ser una documental que se aportó durante la fase de la investigación administrativa y no durante la instrucción del procedimiento de responsabilidad administrativa.

Lo anterior, no obstante que dicha acta haya sido ratificada por el supervisor que la emitió, puesto que dicha ratificación se realizó en la investigación administrativa *****⁽²⁾ sin que se advierta de las constancias del procedimiento que el supervisor *****⁽¹⁾, la hubiere ratificado en el procedimiento administrativo *****⁽²⁾, dándole la oportunidad al presunto infractor de su derecho de contradicción.

En efecto, al allegarse la autoridad demandada en la fase de investigación de datos por conducto de personas que tienen conocimiento de hechos relacionados con el objeto de la investigación, dicha prueba tiene valor indiciario; en virtud de que al no dársele intervención al servidor público implicado para

que repregunte o tache a los declarantes a fin de dilucidar si merecen confiabilidad y credibilidad en la búsqueda de la verdad, demerita el valor de tal medio de convicción; de manera que si la autoridad al momento de resolver le otorga un valor probatorio que no tiene, con ello estaría violentando las normas adjetivas que rigen la materia.

Efectivamente, para que una declaración pueda considerarse perfecta es indispensable que se desahogue con intervención del funcionario implicado, de lo contrario tal medio de convicción sólo poseería un valor relativo a manera de indicio, quedando su eficacia supeditada a la relación que haga la autoridad con otros elementos probatorios.

Esto no significa que la autoridad esté obligada a dar intervención al servidor público en la fase de investigación al momento de desahogar dicha prueba, en tanto no existe disposición legal que la obligue a ello; es decir, no existe impedimento para que en la fase de investigación se diligencien testimoniales o declaraciones sin intervención del funcionario imputado; sin embargo, no por el hecho de que tal obligación no exista, significa que las pruebas desahogadas sin la intervención de quien debe participar de ellas tengan valor probatorio pleno.

Así, el acta administrativa emitida el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, al obrar en un documento público, sólo es apta para acreditar lo que en ella se contiene; luego entonces, el alcance demostrativo de dicha documental no puede ir más allá de su contenido, en este caso, en cuanto a que el supervisor adscrito a la Dirección de Responsabilidades Administrativas de Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali asentó una serie de hechos en la citada acta, más no en cuanto a que los hechos narrados en ésta efectivamente hayan tenido lugar en el tiempo, modo y lugar que las asentó en el acta administrativa.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto los criterios sustentados por el Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Tercer Circuito y por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcriben:

PRUEBA DOCUMENTAL, ALCANCE DE LA. Como la prueba documental es la constancia reveladora de un hecho determinado, lógicamente su alcance conviccional no puede ir más allá de lo que en ella se contiene, pues de ser así se desnaturalizaría la prueba de documentos.

DECLARACION HECHA EN UN INSTRUMENTO PUBLICO. SU VALOR EN JUICIO. La circunstancia de que la declaración de una persona se asiente en un instrumento público, no atribuye al contenido de aquélla, el carácter de prueba plena, ya que lo único de lo que hace fe es que, ante el funcionario que intervino, se hizo la declaración, por lo que dicha declaración no constituye una prueba documental, sino una testimonial rendida sin las formalidades de ley, por haberse recibido por funcionario público, que no es autoridad judicial y sin audiencia de la parte contraria.

No. Registro: 392,325; Sexta Época; Instancia: Tercera Sala; Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 1995, Tomo IV, Parte SCJN; Materia(s): Civil; Tesis: 198; Página: 135.

De ahí, que no es dable jurídicamente otorgarle al acta administrativa de referencia el valor probatorio pleno que la autoridad sancionadora le otorgó en la resolución impugnada para acreditar la falta imputada a la parte actora, **ya que únicamente puede tener el valor de un indicio.**

Así, la citada acta prueba que el supervisor asentó lo siguiente:

1.- En la parte inicial del acta asentó que eran las **cuatro horas con cincuenta y cinco minutos** del día treinta de diciembre de dos mil diecinueve cuando se procedió a levantar el acta administrativa.

2.- En la parte del acta en la que se hacen constar los "Hechos" asentó que eran las **cuatro horas con treinta y siete minutos** del día treinta de diciembre de dos mil diecinueve y encontrándose en avenida Rio Verde y Calle Sexta fue detenido por la unidad de policía municipal ***** (3).

3.- Que el vehículo propiedad de la sindicatura que fue detenido es un vehículo ***** (3).

4.- Que al abordar los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal al referido supervisor, este les comenta que es supervisor de la Sindicatura Municipal y que el vehículo es propiedad de la misma.

5.- Que dichos agentes de la policía municipal se negaron a identificarse en repetidas ocasiones, retirándose finalmente del lugar.

No obstante la información asentada por el supervisor, al estar reducido el valor probatorio de la citada acta

administrativa a un indicio conforme a lo expuesto previamente, para esta juzgadora, **lo asentado en el acta resulta insuficiente para demostrar que la parte actora a las cuatro horas con treinta y siete minutos (4:37) del treinta de diciembre de dos mil diecinueve detuvo el multireferido vehículo y omitió reportar dicha detención en el momento en que se llevó a cabo.**

En efecto, de las diversas documentales con las cuales la autoridad adminiculó la multireferida acta administrativa, no se advierte que aporten datos que corroboren lo expuesto en el acta administrativa de referencia, por lo siguiente:

De las copias certificadas del **Rol de Servicios y Bitácora de detención** que obran en autos del procedimiento administrativo, de fecha veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve correspondientes al tercer turno, zona oriente, que comprendió el horario de las 22:00 horas del veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve a las 6:00 horas del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, como lo expuso la demandada en la resolución impugnada, se acredita lo siguiente:

- Que la parte actora laboró en el tercer turno, patrullas zona oriente, de las veintidós horas (22:00) del veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve a las seis horas (6:00) del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, como operador de patrulla;

- Que la unidad *******(3)** a las **5:15 horas del treinta de diciembre de dos mil diecinueve reportó la intervención en** Avenida Rio Verde y calle Sexta, la detención de un vehículo tipo *******(3)**.

Las citadas documentales no aportan dato alguno con el que se acredite que la detención del vehículo haya tenido lugar a las **cuatro horas con treinta y siete minutos (4:37)** del **treinta de diciembre de dos mil veinituno**, ya que del contenido de la primer documental invocada, únicamente acredita que la parte actora se encontraba activo como **operador de patrulla** el día y hora en que se suscitaron los hechos atribuidos.

Por lo que hace a la segunda documental que contiene la **bitácora de detención, únicamente, es apta** para acreditar que se registró un incidente relacionado con la unidad *******(3)** el día treinta de diciembre de dos mil

diecinueve a las cinco horas con quince minutos **(5:15)**, respecto a **la intervención** del vehículo tipo *******(3)**, avenida Rio Verde y calle Sexta, probanza que lejos de corroborar lo asentado por el supervisor en el acta administrativa multicitada, demerita el alcance probatorio de la misma, al estar acreditado que el reporte de la detención del vehículo **sí se realizó** y se registró en la bitácora del despachador de C4 a una hora distinta a las cuatro horas con treinta y siete minutos **(4:37)** que es la hora en la que el supervisor señaló que se debió hacer el reporte de la detención.

Lo que para esta juzgadora resulta coincidente con lo declarado por la parte actora en audiencia de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós (obranste de folio 381 a 390 de autos) y que robustece lo manifestado por dicha servidora pública en el sentido de que la detención del vehículo se llevó a cabo a las cinco horas con quince minutos (5:15 horas) del día treinta de diciembre del dos mil diecinueve, en la cual manifestó cito textualmente:

*"Como primer antecedente y a fin de desvirtuar las imputaciones tanto de la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Sindicatura Municipal, así como la Comisión de Honor y Justicia, en relación a los hechos vertidos en la documental antes descrita, resulta totalmente falso y apartado a la realidad historia de las circunstancias fácticas, puesto que la detención del vehículo, se llevó a cabo a las CINCO HORAS CON QUINCE MINUTOS (05:15 HORAS), y no como malintencionadamente el Supervisor plasmo en el acta administrativa, es decir, refieren que fue a las 04:37 horas de aquel día, aprovechándose de la buena fe y apariencia del buen derecho con el que cuenta este Órgano Colegiado, por lo que en el caso particular que nos interesa, mi compañero *******(1)** realizó debidamente el reporte de la detención del vehículo, lo que quedo formalmente asentado de conformidad con los lineamientos del artículo 20, fracción XXXVI del Reglamento que rige nuestro actuar, siendo evidente que dicha información obra en los autos del expediente que nos ocupa, en mérito de los registros de la bitácora de detenciones que remitió el Comandante del Centro Estratégico de Evaluación de Eficiencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil veinte.*

Luego entonces, y previo a realizar la intervención del vehículo, mi compañero moduló en la frecuencia a fin de realizar el reporte correspondiente, es decir, justamente cuando procedíamos a detener la marcha de la unidad, sin embargo la frecuencia presentaba fallas de tal manera que no nos permitía ingresar al sistema en ese preciso instante, lo que es común en la operatividad y en la zona donde nos encontrábamos por el alto índice de reportes, por lo que en

dos ocasiones más mi compañero trató de ingresar a la frecuencia, siendo en ese momento que a las 05:15 horas, antes de descender de la unidad y realizar la entrevista al Ciudadano, quedo asentado el citado registro”

Por ello, se concluye que el documento consistente en el acta administrativa, por sí solo, carece de la eficacia y alcance suficiente para tener por acreditado que la detención del vehículo ocurrió exactamente las cuatro horas con treinta y siete minutos, y por lo tanto, que el reporte debió registrarse a esa misma hora en la bitácora de detención de vehículos, pues las circunstancias de tiempo no fueron asentadas con la precisión necesaria, tomando en consideración que sí existe el reporte de detención de dicho vehículo, registrado con treinta y ocho minutos de diferencia respecto de lo asentado en el acta, acta administrativa que por sí sola no logra desvirtuar la presunción de inocencia de la que como ya se mencionó goza la parte actora en el procedimiento administrativo del que se derivó la resolución administrativa que se impugna.

Además, el alcance probatorio de dicha acta administrativa se ve disminuido en razón de que:

- i. Existe una inconsistencia en cuanto la hora en la que se realiza el levantamiento del acta y la hora en la que se hace constar la detención, toda vez que al inicio del acta el supervisor estableció que **se procede a levantar la misma siendo las cuatro horas con cincuenta y cinco minutos**, pero más adelante en la propia acta, al **narrar los hechos** objeto de ésta, se asentó que eran las **cuatro horas con treinta y siete minutos cuando ocurrió la detención**.

De tal forma la redacción del acta no permite conocer el correcto desarrollo cronológico de los hechos, por ejemplo, en que momento fue que el supervisor verificó que no se había hecho el reporte a la central de radio de su propia detención, si el acta se elaboró durante la intervención de los agentes municipales o posterior a su actuación, si el acta se elaboró en el lugar de la detención o en lugar distinto; en consecuencia, el acta administrativa ve disminuido su alcance y eficacia probatoria.

- ii. Al ser el supervisor de la Sindicatura Municipal quien fue detenido por los agentes municipales a bordo del vehículo oficial, es decir, al ser directamente el sujeto que resiente el acto de

molestia de la autoridad policial, se ve afectada su objetividad e imparcialidad como servidor público, por lo que lo óptimo era que se hubiera excusado del conocimiento del asunto al constituir parte en el mismo, lo que de igual forma, menoscaba el alcance y eficacia del acta administrativa.

Por lo tanto, al estar reducido el valor probatorio del acta administrativa de fecha treinta de diciembre de dos mil diecinueve y ante las deficiencias que presenta, resulta insuficiente para tener acreditada la conducta imputada al demandante, respecto a que **omitió reportar en tiempo y forma la detención** del vehículo tipo *****⁽³⁾, en el momento en que se llevó a cabo.

Conclusión.

Por lo anterior, si no existen elementos de prueba aptos, idóneos, bastantes ni concluyentes para tener por demostrados todos los elementos que configuran la causa legal de responsabilidad, resulta ineludible la insuficiencia probatoria por parte de la demandada, ya que del conjunto de probanzas valoradas no se llega a la certeza plena de las imputaciones de responsabilidad hechas a la parte actora.

Es aplicable al caso, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito que se reproduce a continuación:

PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. En observancia a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna causa de responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito indispensable que las pruebas demuestren plenamente que su actuación se adecua a la conducta o causa de responsabilidad expresamente sancionada en la ley. Por tanto, si no existen elementos de prueba aptos, idóneos, bastantes ni concluyentes para tener por demostrados todos los elementos que configuran la causa legal de responsabilidad, debe estimarse que existe prueba insuficiente, porque del conjunto de probanzas valoradas no se llega a la certeza plena de las imputaciones de responsabilidad.

Época: Novena Época; Registro: 179803; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XX, Diciembre de 2004; Materia(s): Administrativa; Tesis: IV.2o.A.126 A; Página: 1416.

Consecuentemente, es de concluirse que en la resolución impugnada no se aplicaron las disposiciones debidas,

pues al no existir elementos de prueba suficientes para acreditar la falta administrativa imputada a la parte actora, se debió haber determinado que el citado procedimiento era improcedente por falta de elementos para fincar responsabilidad, en términos del artículo 238, fracción XVIII, inciso a, del Reglamento del Servicio Profesional¹, actualizándose la causal de nulidad prevista en el artículo 108, fracción IV, de la Ley del Tribunal, lo que conlleva a declararla nula.

Por otra parte, en relación a los **argumentos de defensa de la autoridad demandada en juicio** respecto al motivo de inconformidad en análisis, en los que señaló:

1) Que existen elementos probatorios suficientes que acreditaron el incumplimiento a la obligación prevista por el numeral 20, fracción XXXVI, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, mismos que fueron minuciosamente analizados y valorados por la Comisión de Honor y Justicia, a efecto de emitir de manera fundada y motivada la resolución impugnada.

2) Que el hoy actor durante el procedimiento no desvirtuó la falta que le fue imputada.

3) Que el acta administrativa de treinta de diciembre de dos mil diecinueve es medio idóneo para acreditar el incumplimiento de la obligación imputada al ser elaborada por un servidor público con fe pública de conformidad con el numeral 16, fracción XI, del Reglamento Interno de la Sindicatura Municipal de Mexicali, y contar con todos los requisitos de validez.

5) Que al haber sido expedida el acta administrativa por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, no requiere ser ratificada por su signante para que adquiriera valor probatorio pleno, siendo aplicable al caso la tesis de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS ACTAS LEVANTADAS CON MOTIVO DE LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS POR UN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO REQUIEREN RATIFICACIÓN (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).".

Los argumentos esgrimidos **son infundados**.

¹**Artículo 238.-** El procedimiento de Remoción, se sustanciará conforme a lo siguiente:

XVIII. Las resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia, según corresponda, consistirán en:

a) Improcedente por falta de elementos."

Lo infundado de los argumentos estriba en que, tal y como se expuso en el presente fallo, el acta administrativa de treinta de diciembre de dos mil diecinueve tiene un valor indiciario y las pruebas obrantes en el procedimiento administrativo *****⁽²⁾ son insuficientes para acreditar que la parte actora incurrió en responsabilidad administrativa por haber incumplido con la obligación prevista en la fracción XXXVI del artículo 20 del Reglamento del Servicio Profesional.

En lo relativo al argumento de que el hoy actor durante el procedimiento no desvirtuó la falta que le fue imputada, **resulta infundado** pues como ya se estableció en la presente resolución, conforme al principio de presunción de inocencia, le corresponde a la autoridad demandada la carga de la prueba para acreditar que la parte actora incumplió la obligación consistente en reportar a la central de radio, la detención de cualquier persona o vehículo, en el momento en que ésta se lleve a cabo.

Lo que se sustentó con las tesis judiciales de rubros *"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES."* y *"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONTENIDO DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL."* de datos de identificación ya antes precisados.

Por lo tanto, constituía una carga de la autoridad demandada desvirtuar la presunción de inocencia que opera en favor del miembro policial, con las pruebas pertinentes, eficaces y suficientes para acreditar la imputación realizada al miembro policial, y no a éste último desvirtuar la imputación.

En cuanto a que el acta administrativa es medio idóneo para acreditar el incumplimiento imputado, por haber sido elaborado por servidor público con fe pública, y contar con todos los requisitos de validez, dicha manifestación **resulta infundada**.

Lo anterior en razón de que, como se abordó en la presente resolución, el acta administrativa emitida el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, si bien constituye un documento público por haber sido elaborado por un servidor público en ejercicio de sus funciones, únicamente es apta para acreditar lo que en ella se contiene, es decir, el alcance demostrativo de dicha documental no puede ir más allá de su contenido.

En este caso, resultó eficaz para acreditar que el supervisor adscrito a la Sindicatura Municipal, en ejercicio de sus funciones, asentó una serie de circunstancias que fue de su interés hacer constar, más no tiene el alcance suficiente para acreditar por sí sola, que los hechos narrados en ésta efectivamente hayan tenido lugar, pues para ello debió corroborarse con otros medios de prueba que aportaran un contexto de congruencia y certeza al contenido del acta.

De igual manera, se precisa que la tesis aislada II.2o.A.41 A, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: *"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS ACTAS LEVANTADAS CON MOTIVO DE LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS POR UN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO REQUIEREN RATIFICACIÓN (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)."*, invocada por la demandada, resulta inaplicable al caso concreto en razón que se refiere a la aplicación supletoria del artículo 145 del Código Federal de Procedimientos Penales a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Precepto que no es de aplicación supletoria al procedimiento de remoción materia del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial², que dispone que a falta de disposición expresa en dicho Reglamento se aplicará supletoriamente las normas contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California.

Aunado a que dicha tesis judicial resulta inaplicable al caso concreto, toda vez que ya fue abordado el argumento relativo a que el acta administrativa sí fue ratificada por su suscriptor durante la investigación, sin embargo, esto no logra trascender en el valor de dicho instrumento, toda vez que el mismo no fue perfeccionado dentro del procedimiento administrativo con el interrogatorio de quienes la elaboraron, con presencia del servidor público sujeto al procedimiento, a efecto de que tuviera oportunidad de controvertir el dicho de éstos.

En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 108, fracción IV, de la Ley del Tribunal, se declara la nulidad de la resolución dictada el veinte de abril de dos mil veintitrés por la Comisión de Honor y Justicia en el

² **"Artículo 243.-** A falta de disposición expresa en el presente Reglamento se aplicará supletoriamente las normas contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California."



procedimiento administrativo de responsabilidad
***** (2), mediante la cual se impuso a la parte actora
suspensión temporal por quince días laborales sin goce de
sueldo.

Es así que, al **ser fundado** el motivo de
inconformidad examinado, **resulta innecesario el estudio de
los demás conceptos de nulidad expuestos por el actor**,
ya que de resultar fundados en nada variaría el sentido del
presente fallo, sin que ello implique desatender el principio de
exhaustividad.

SÉPTIMO.- Efectos de la nulidad:

Con fundamento en el artículo 109, fracción IV,
inciso b, de la Ley del Tribunal se condena a la Comisión de
Honor y Justicia del Ayuntamiento de Mexicali a lo siguiente:

1.- Dicte un proveído en el que deje sin efectos la
resolución declarada nula.

2.- Ordene se tilden las anotaciones en los libros
correspondientes, así como en el expediente personal de la
parte actora.

3.- Gire oficios a la Dirección de Seguridad Pública
Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, así como aquellas
autoridades que deban conocer del presente fallo para efecto
de que tilden las anotaciones que se hayan efectuado con
motivo de la sanción declarada nula.

4.- En caso de que la sanción impuesta en la
resolución declarada nula haya sido ejecutada, realice los actos
necesarios a fin de que se cubra a la parte actora las
percepciones económicas que dejó de percibir con motivo de la
sanción de suspensión temporal por treinta días sin goce de
sueldo que le fue impuesta, debiendo entregar un desglose
pormenorizado de los conceptos y cantidades pagadas.

Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en
el artículo 107 de la Ley del Tribunal, se...

R E S U E L V E:

PRIMERO.- Es fundado el primer motivo de
inconformidad analizado en el presente fallo,
consecuentemente;



SEGUNDO.- Se declara la nulidad de la resolución dictada el veinte de abril de dos mil veintitrés por la Comisión de Honor y Justicia en el procedimiento administrativo de responsabilidad *****⁽²⁾, mediante la cual se le impuso suspensión temporal del cargo por quince días laborales sin goce de sueldo.

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 109, fracción IV, inciso b, de la Ley del Tribunal se condena a la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Mexicali en los términos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia.

Notifíquese por Boletín Jurisdiccional a las partes.

Así lo resolvió la licenciada Leticia Castro Figueroa, Primer Secretaria de Acuerdos de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, quien actúa en funciones de Magistrada por ministerio de ley, según designación hecha mediante acuerdo de Pleno de este órgano jurisdiccional de fecha seis de julio de dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto por los artículos 12 y 21, fracción XII, de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California publicada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, y firmó ante la presencia del Secretario de Acuerdos, Licenciado Julián Javier Flores Zurita, quien da fe.

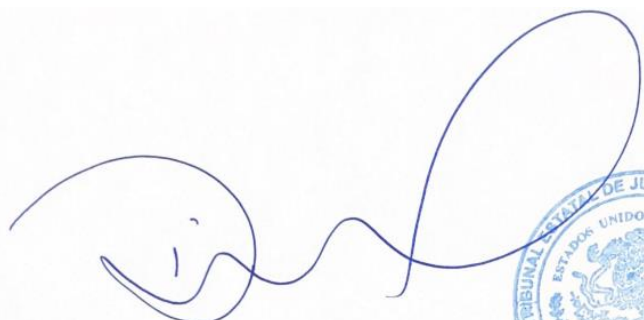
"1.- ELIMINADO: Nombre, en fojas 1, 8, 9, 14, 15, 17, 18 y 22. Fundamento legal: artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4 fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales."

"2.- ELIMINADO: Número de expediente, en fojas 1, 5, 7, 13, 14, 15, 18, 26, 28 y 29. Fundamento legal: artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4 fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales."

"3.- ELIMINADO: Datos de vehículo, en fojas 8, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22 y 24. Fundamento legal: artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4 fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales."

"4.- ELIMINADO: Oficios, en fojas 8, 14, 15 y 16. Fundamento legal: artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4 fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales."

LA SUSCRITA LICENCIADA DANIELA ONTIVEROS RAMÍREZ, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA, HACE CONSTAR: -----
QUE LO TRANSCRITO CON ANTERIORIDAD CORRESPONDE A UNA VERSIÓN PÚBLICA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA LICENCIADA LETICIA CASTRO FIGUEROA, PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA, QUIEN EN LA FECHA EN QUE EMITIÓ LA SENTENCIA ACTUÓ EN FUNCIONES DE MAGISTRADA POR MINISTERIO DE LEY, SEGÚN DESIGNACIÓN HECHA MEDIANTE ACUERDO DE PLENO DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DE FECHA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12 Y 21, FRACCIONES V Y XII, DE LA LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA PUBLICADA EL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO EN LA SECCIÓN I DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, RELATIVA A LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA DENTRO DEL JUICIO 86/2023 SE, EN LA QUE SE SUPRIMIERON DATOS QUE SE HAN CONSIDERADO COMO LEGALMENTE RESERVADOS O CONFIDENCIALES, CUBRIENDO EL ESPACIO CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DIEZ ASTERSICOS; VERSIÓN PÚBLICA QUE VA EN VEINTINUEVE (29) FOJAS ÚTILES. -----
LO ANTERIOR CON APOYO DE LOS ARTÍCULOS 80, 83, FRACCIÓN VI, INCISO B, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. DOY FE. -----



SALA ESPECIALIZADA
EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
MEXICALI, B.C.